



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN RESPECTO A PERSONAS EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO.¹

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF DISTINCTION WITH RESPECT TO PEOPLE IN THE COLOMBIAN ARMED CONFLICT.

María Estefanía Martínez Murcia
Universidad Católica de Colombia

Resumen

El Derecho Internacional Humanitario regula y busca soluciones a los problemas de índole humanitaria derivados de conflictos internacionales e internos. Su función no radica ni en permitir ni en prohibir los conflictos armados, sino que busca humanizar y limitar sus efectos tanto como sea posible, a través de la aplicación de principios fundamentales que se encuentran determinados en la legislación interna y en los tratados y protocolos internacionales ratificados por Colombia. Este trabajo examina el principio de distinción, el cual pretende diferenciar el trato que durante los conflictos armados se le otorga a la población civil y personas en estado de indefensión que participan activamente del conflicto, contrastando los requisitos formales para la aplicación de dicho principio, con el análisis factico y jurídico de casos presentados en Colombia que han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de que existe un amplio catálogo normativo respecto al principio de distinción, su aplicación se dificulta debido a determinados patrones de conducta y omisiones por parte del Estado y los combatientes en el desarrollo de los conflictos armados, lo cual conlleva a la vulneración de principios, garantías fundamentales y disposiciones internacionales, especialmente respecto a civiles.

¹ Artículo de investigación que se presenta como requisito para optar al título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia por la estudiante perteneciente a la facultad de Derecho, identificada con código estudiantil No. 2111974. Correo electrónico: memartinez74@ucatolica.edu.co, bajo la asesoría del Doctor Bernardo Pérez Salazar, docente investigador de la Universidad Católica de Colombia.

Palabras clave: Derecho Internacional Humanitario; Principio de distinción; Conflictos armados; Combatientes; Civiles; Garantías; Protección; Vulneración; Responsabilidad internacional del Estado.

Abstract

International Humanitarian Law regulates and seeks solutions to humanitarian problems derived from international and internal conflicts. Its function does not lie in allowing or prohibiting armed conflicts, but rather seeks to humanize and limit its effects as much as possible, through the application of fundamental principles that are determined in domestic legislation and in international treaties and protocols signed by Colombia. This paper examines the principle of distinction, which aims to differentiate the treatment that in war periods is granted to civilian population and defenseless people who were actively engaged in the conflict, contrasting the formal requirements for the application of this principle with the factual analysis of cases that occurred in Colombia and have been ruled on by the Inter-American Court of Human Rights. Although there is an extensive normative catalog regarding the principle of distinction, its application is difficult due to certain behavioral patterns and omissions on the part of the State, combatants and civilians in the development of armed conflicts, which lead to the violation of principles, fundamental guarantees and international provisions.

Key words: International Humanitarian Law; Principle of distinction; Armed conflicts; Fighters; Civil; Guarantee; Protection; Infringement; International responsibility of the State.

Sumario

Introducción. Fuentes y método de investigación. 1. Principio de distinción en el Derecho Internacional Humanitario. 2. La aplicación del Principio de distinción en Colombia. 2.1. Caso Las Palmeras vs Colombia. 2.2. Masacre de Santo Domingo Vs Colombia 2.3. Masacre de Mapiripán. 3. Discusión: Análisis de pronunciamientos de la Corte IDH. Conclusiones. Referencias.

Introducción

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), como fuente reguladora de los conflictos armados² a través de normas internacionales (ordinarias o consuetudinarias), tratados internacionales vigentes y principios fundamentales, provee especial protección a ciertas categorías de personas y bienes vulnerables a los efectos nocivos de la guerra. Su propósito es prevenir y sancionar la masiva violación de derechos humanos e infracciones a los principios esenciales del DIH que se presentan en el curso de las hostilidades propias de los conflictos armados. Las conductas que atentan contra la integridad de personas o bienes protegidos por el DIH se sancionan con base en el principio de distinción que busca garantizar el respeto, la asistencia y protección a las personas que se ven expuestas a las hostilidades en curso durante un conflicto armado y no hacen parte de las hostilidades o han dejado de participar en ellas, esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 4º del Protocolo II de 1977.

De la estrecha relación entre la guerra y lo dispuesto en el Derecho Internacional Humanitario, se deriva la existencia de un permiso legítimo para “matar”. Sin embargo, al ejecutar dicha acción, se deben tener en cuenta una serie de condiciones, que de no cumplirse podrían generar la vulneración de derechos fundamentales y por ende la responsabilidad del Estado, siendo inoperantes atenuantes de responsabilidad tales como la legítima defensa. Como acertadamente, lo señala Silva (2017) “La aplicación del permiso para matar (incluso del deber de hacerlo) requiere que un combatiente, militar, miliciano o voluntario que porten en todo caso un signo distintivo— **mate** —de modo adecuado al Derecho internacional Humanitario a un combatiente enemigo.” (p. 3), dicha actividad debe estar acorde con el principio de necesidad y proporcionalidad de la situación en que se encuentren dentro del combate, sin embargo, más allá de justificar la operatividad de los combatientes, es importante de diferenciar el trato entre quien es combatiente y quien no.

² De acuerdo a lo establecido en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, un conflicto armado surge cuando hay una guerra declarada o cualquier otro conflicto armado entre dos o varias altas partes contratantes, aun cuando una de ellas no haya reconocido el estado de guerra.

Para ello en el presente artículo se estudiará la aplicación del principio de distinción en el marco del DIH, a partir del análisis de algunos casos de infracción de este principio en el contexto del conflicto armado interno en Colombia, los cuales han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera, se busca destacar los problemas concretos asociados a aplicación de estas disposiciones jurídicas en el contexto del conflicto interno colombiano. Para lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué aspectos dificultan la aplicación del DIH en el conflicto armado colombiano, concretamente respecto a lo establecido en el principio de distinción?

Fuentes y método de investigación

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó un método inductivo y dogmático, por medio del cual se realizó un análisis jurídico de los distintos casos recopilados a través del buscador de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, del cuadernillo de la misma, y de las opiniones consultivas de los distintos organismos internacionales, respecto a la aplicación del principio de distinción en el ámbito internacional. La aplicación del método se ejecutó conforme a los parámetros de investigaciones, señalados por Agudelo (2018), en donde “al partir de un problema social que revierte categorías jurídicas, el investigador deberá hacer elección de las unidades de análisis objeto de investigación. Para ello pueden ser unidades de análisis: individuos, grupos, empresas o incluso países.” (p. 36), lo que nos permitió posteriormente estudiar la aplicación del principio de distinción en algunos casos de especial relevancia en Colombia.

La Corte Interamericana es la fuente primaria en este artículo, ya que la jurisprudencia que esta ha desarrollado a lo largo de los años genera pautas a la hora de investigar y emitir un pronunciamiento legal respecto a las conductas presentadas dentro del conflicto armado interno colombiano. A través de las características literarias de la investigación socio-jurídica, en primer lugar, se extrajo la información respecto a los fundamentos que tuvo la

Corte a la hora de condenar a los responsables de las atrocidades, llegando a la conclusión de que la aplicación del principio de distinción se dificulta, a causa de la ambigüedad en los términos jurídicos y de las condiciones de las personas involucradas en el conflicto.

Teniendo en cuenta que la información fue suministrada en su totalidad por las diversas fuentes legales y doctrinales, no hubo ningún acuerdo o compromiso ético al no existir un contacto directo con las personas involucradas en los casos mencionados, lo cual limitó la investigación a la discrecionalidad de su autor primario, y a verificar la aplicabilidad de la ley en dichos casos. Sin embargo, teniendo en cuenta que el interés en la investigación radica en determinar las causas por las cuales se ven afectados derechos y garantías fundamentales, se proponen pautas para el cumplimiento y efectivo juzgamiento en el orden interno, sobre las conductas que atentan contra la dignidad humana. Sugerencias que esperamos, en algún momento puedan contribuir a la prevención de nuevos actos ilícitos en el marco de un conflicto interno.

1. Principio de distinción en el Derecho Internacional Humanitario

De acuerdo con lo señalado por Alejandro Valencia Villa (2007), el Derecho Internacional humanitario “es un intento por recuperar las antiguas tradiciones militares del honor, aplicándolas a la guerra democrática y extender las normas de conducta en cuanto a asistencia a los heridos y recuerdo de los muertos” (p. 14). Al suscribir las convenciones internacionales de DIH, los Estados adquieren la responsabilidad internacional de hacer respetar y sancionar las infracciones a normas humanitarias, así como de observar su aplicación en el desarrollo de sus actividades bélicas para proteger y garantizar la integridad y derechos de quienes no participan directamente de las hostilidades o quienes habiendo participado ya no lo hacen.

Varias convenciones de Derecho Internacional Humanitario gozan de trascendencia y reconocimiento para la protección de garantías en medio de las hostilidades bélicas, entre ellas, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, la Carta de las Naciones Unidas,

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como las 161 normas existentes de derecho consuetudinario aplicables a conflictos armados identificados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005).

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)³ son los organismos internacionales encargados de regular y sancionar lo convenido en los diferentes tratados, declaraciones y prácticas generales que los Estados adoptan como obligaciones jurídicas, entre ellos, las disposiciones del DIH. (Cardona & otros, 2008, p. 176). Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es reconocido universalmente como el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la normatividad existente del DIH, aunque carece de facultades de imponer sanciones a las infracciones que conozca.

En la medida en que el Derecho Internacional Humanitario regula tanto el accionar de ejércitos regulares como de grupos armados irregulares en el marco de los conflictos armados, el principio de distinción busca la protección de la población civil y de bienes civiles a partir de la distinción entre personas combatientes y no combatientes. “El propósito de esta diferenciación es que las hostilidades se libren entre combatientes y contra objetivos militares para que en ninguna circunstancia afecten a los no combatientes y a los bienes civiles” (Valencia Villa, 2007, p. 120). Es decir, en el curso de hostilidades bélicas es absolutamente ilícito atacar a personas no combatientes y a bienes civiles.

El Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, establece expresamente este principio, señalando que:

Artículo 48: A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las partes en conflicto harán distinción en todo momento

³ “El Derecho Internacional Humanitario – DIH - ha sido aplicado como fuente auxiliar en los casos en los que la Corte Interamericana se ha enfrentado con violaciones de derechos humanos producidas en los diferentes países que suscribieron el reconocimiento de la competencia de la misma y la Convención Interamericana” (Mira & Arenas, 2004, p. 402)

entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y, en consecuencia, dirigirán operaciones únicamente contra objetivos militares.

Este principio tiene rango de norma imperativa de derecho internacional o también llamada *Ius cogens*, es decir, son normas del derecho internacional que no pueden ser modificadas por tratados internacionales ni por normas consuetudinarias especiales. La Corte Internacional de Justicia clasificó al principio de distinción como “*el primero de los principios cardinales que constituyen la esencia del derecho humanitario*” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1997). Dentro de este marco “el principio de distinción es una regla “*fundamental*” que debe ser observada por todos los Estados, independientemente de que hayan ratificado o no las convenciones que las contienen, ya que constituye uno de los principios “*intransgredibles*”, y de naturaleza consuetudinaria, del DIH.” (Corte Constitucional, 2007, p. 1).

La finalidad del principio de distinción radica básicamente en brindar una mayor protección a las personas que no participan en las hostilidades, imponiendo a los combatientes ciertas obligaciones, por ejemplo, para diferenciarse de la población civil “las partes en el conflicto armado deben: portar un uniforme, un distintivo fijo y reconocible y llevar armas a la vista”. (Angarita Piña, 1999, p.4)

A partir de este principio se derivan otros dos: el principio de protección y el de objetivo militar. Sin embargo, dado que el principio de distinción es el principio fundamental del DIH, “basta la formulación de éste para que los otros existan por añadidura, fortaleciendo su existencia y aplicación.” (López Díaz, 2009, p.236).

Con la implementación de este principio, el DIH busca generar seguridad a la población civil y demás personas, brindando garantías de no ser objeto de hostilidades bélicas y, en todo caso, de distinguirse durante el conflicto de los grupos armados.

Por su parte, Bernal y Moya (2018), afirman que “no pueden ser tomados como prisioneros y mucho menos cosificados para provocar a su adversario como maniobra

distractora o como si fuesen blancos lícitos u objetivos militares; además, no participan en las hostilidades y, por su condición de niños, mujeres, ancianos u hombres, no pueden ser parte de un grupo de combatientes y tampoco pueden ser usados como emisarios, correos o informantes.” (p. 139)

Adicional a ello, Ricardo Angarita Piña (1999, p. 4) señala la importancia de “una participación calificada, eficaz, e inmediata, y con resultados buscados y concretos, que produzcan una ventaja militar esperada”. Respecto a ello y de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y 50 del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, son combatientes las personas que participan directamente en las hostilidades, entre ellas, los miembros de una fuerza armada activa en el desarrollo del conflicto armado⁴, así como los miembros de organismos paramilitares o servicios armados ligados a alguna fuerza armada, excluyendo al personal sanitario y religioso debido a que su función no es combatir.

Es importante aclarar el alcance de lo que significa la *participación directa en las hostilidades*. En general, esta noción refiere aquel comportamiento que constituye una amenaza directa e inmediata contra el oponente. El CICR (2010), señala que ni los Convenios de Ginebra ni sus Protocolos adicionales contienen una definición de dicho concepto, situación que sin lugar a dudas da lugar a diversas interpretaciones de este término.

“[...] lo cierto es que no existe en los textos convencionales de DIH una definición explícita de la «participación directa en las hostilidades» pues, como se ha señalado, ni las actas de la Conferencia Diplomática de 1949 ni las de la Conferencia Diplomática 1974-1977 nos proporcionan una definición precisa de qué debe entenderse por una «participación directa» en la acción hostil” (Rodríguez-Villasante y Prieto, 2013, p.174)

Excepcionalmente son combatientes aquellas poblaciones de un territorio que, al acercarse el enemigo, lo enfrentan espontáneamente. Es importante aclarar que cuando las personas participan *directamente* de las hostilidades, se presenta el fenómeno de

⁴ Incluye grupos armados no estatales, es decir, aquellos que cumplan con dos condiciones: 1. Hallarse bajo la dirección de un mando responsable 2. Ejercer en una parte del territorio del Estado un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. (Pacheco Sánchez, sin fecha, p. 1))

“desnaturalización de persona protegida”, por lo cual pierden la inmunidad de la cual gozan, abriendo la posibilidad de ser atacadas y convertidas en objetivos lícitos, lo que incluso puede ocasionarles la muerte. (Bernal y Moya, 2018). Por consiguiente, la participación directa de una persona no combatiente se presume cuando esta asume el papel de combatiente y participa en las hostilidades, generando un nexo causal entre la actividad que empieza a desarrollar y el daño cometido al personal y/o bienes del adversario. Sin embargo, aunque estas personas pierden la inmunidad que los cobija al ejecutar sus actos, siguen teniendo la calidad de civiles y fuera del combate, no pueden ser atacadas al no representar peligro para el adversario.

De acuerdo con lo anterior, se deduce entonces que; la interpretación del principio de distinción está sujeta a una amplia discrecionalidad jurídica para decidir si una persona participo o no directamente dentro del conflicto.

2. La aplicación del principio de distinción en Colombia.

En el ordenamiento jurídico colombiano, al amparo del artículo 214 de la Constitución Política, la Corte Constitucional a calificado como parte del bloque de constitucionalidad la responsabilidad internacional del Estado a la hora de garantizar el respeto a la población civil, el cuidado y atención de los heridos, el trato con dignidad a las personas detenidas, y la protección de los bienes indispensables para la supervivencia, en el desarrollo de hostilidades bélicas, de conformidad con los convenios internacionales de derecho internacional humanitario ratificados por el país.⁵

Así mismo, respecto a la población no combatiente, el Artículo 135 del Código Penal Colombiano, señala que “Se entiende por personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:

⁵ Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995, Revisión constitucional del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, M. P. Alejandro Martínez Caballero, 18 de mayo de 1995.

1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
4. El personal sanitario o religioso.
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga.
7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.
8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse”.

Según lo señalado en la Sentencia C-291 de 2007, la protección establecida por el principio de distinción ampara tanto a las personas civiles como a aquellas personas que, habiendo participado en las hostilidades en periodo de guerra, han sido desvinculadas del combate por:

1. Estar en poder de otro actor armado en el conflicto.
2. No poder defenderse en razón de estar inconscientes, haber naufragado, estar heridas o estar enfermas, o
3. Haber expresado en forma clara su intención de rendirse, absteniéndose de actos hostiles y de intentos de evasión. (p. 3).

En el ordenamiento jurídico colombiano existen numerosos pronunciamientos respecto al principio de distinción, los cuales derivan un conjunto de características necesarias para diferenciar entre la condición de combatiente y civil, con miras a su aplicación en la regulación del conflicto armado interno y la efectiva protección de derechos y garantías fundamentales de los sujetos que no hacen parte activa dentro del mismo. En la

jurisdicción latinoamericana, paulatinamente se ha reconocido la existencia del *ius cogens* incorporándose en los pronunciamientos judiciales.

Dada la prolongada duración del conflicto armado en Colombia, la realidad es que perdura el riesgo significativo de ser objeto de violación de derechos humanos y de infracciones al DIH para la población civil que reside en las zonas donde se llevan a cabo hostilidades⁶ (Rodríguez-Villasante y Prieto, 2013). Además, dado el protagonismo de grupos armados no estatales que utilizan estrategias irregulares propias de la guerra de guerrillas, en la práctica se presentan situaciones como que la población que habita en determinadas zonas de conflicto se ve obligada a participar en las hostilidades colaborando de alguna manera con las partes enfrentadas, o que los combatientes se camuflen dentro de la población civil como estrategia para no ser identificados por el adversario, y la escenificación engañosa de combates para justificar falsos positivos en los que las fuerzas armadas estatales ejecutan a civiles presentados de manera falaz como supuestos guerrilleros. O inclusive a través de violaciones importantes a los principios fundamentales del DIH como el reclutamiento forzado de menores y el asesinato selectivo o indiscriminado de civiles ajenos a las hostilidades para aterrorizar a la población, entre otros.

Es preciso señalar, que las personas que gozan de la calidad de “protegidas”, pero que participan eventualmente en las hostilidades, recuperan su protección cada vez que se finalice el acto hostil que están ejecutando. Castillo, Lozano, Mateus y Molano (2007), afirman que “esta situación se conoce como la “puerta giratoria”, pues denota de qué manera un individuo puede entrar y salir continuamente de su esfera de protección, al tiempo que se encuentra contribuyendo de manera efectiva a los objetivos militares de una de las partes del conflicto en menoscabo de la otra”. (p. 22).

⁶ Según la ONU, la mayor parte de las víctimas de conflictos armados en el mundo actualmente son civiles. Sólo en 2018, la ONU reportó más de 22.800 civiles muertos o heridos en apenas seis países: Afganistán, Iraq, Mali, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2019/05/1456531#:~:text=%E2%80%99Clos%20civiles%20siguen%20conformando%20la,Sud%C3%A1n%20del%20Sur%20y%20Yemen.%E2%80%9D>

No es relevante el hecho de que una persona represente o no una amenaza para la parte adversa, sino el simple hecho de que ha decidido participar directamente de un conflicto. De igual manera, la controversia dependerá del periodo y la concurrencia en que estas personas se vinculen a la guerra, ya que no es lo mismo que una persona se haya vinculado una sola vez a un grupo armado para contribuir a al patrullaje de una sola, del hecho de que esta participe persistentemente, ya que su comportamiento, podría indicar la ocurrencia de una conducta conflictual en el futuro.

Valencia Villa (2007) señala que “ante el abismo entre la prédica y la práctica del derecho humanitario, uno de los medios más efectivos para lograr que se respete mejor es sancionar de manera certera las infracciones al derecho humanitario” (p .241), teniendo en cuenta que existen casos en los que se evidencian notorias brechas entre el reconocimiento de las normas humanitarias y la intención de respetarlas lealmente por parte de los combatientes, lo cual denota la dificultad en la aplicación del principio de distinción en el conflicto colombiano.

Como lo asevera César Peña Aragón (2014) “la diferencia que hay entre reconocer y aplicar las normas se debe a una serie de mecanismos que conducen al combatiente a abdicar de sus compromisos morales y a cometer violaciones del DIH” (p. 24).

Resulta conveniente entonces, tener claro el concepto de responsabilidad extracontractual del Estado para justificar la intervención de la Corte IDH dentro del conflicto interno colombiano. De acuerdo con Andrea Cepeda Caballero (2016), “para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado se necesitan demostrar probatoriamente tres elementos: el primero de ellos es el hecho u omisión dañosa, el segundo se refiere al daño antijurídico, y, el tercero es el nexo de causalidad.” (p. 10), lo que quiere decir que, dentro del marco de su soberanía, el Estado tiene con sus habitantes la obligación de reconocer los daños que eventualmente cause alguno de sus agentes con su acción u omisión, derivando la reparación integral a las víctimas.

A continuación, se presentan algunos casos de trascendencia ocurridos con ocasión del conflicto interno armado en Colombia, en los cuales se evidencia la vulneración del principio de distinción en perjuicio de la esencia misma del derecho de guerra: la protección de derechos humanos de las personas que se encuentran en medio de un conflicto armado y no hacen parte de las hostilidades, o han dejado de participar en ellas, casos en los cuales el Estado ha sido condenado internacionalmente, subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales conflictos armados, en virtud de lo señalado por el artículo 3⁷ común a los acuerdos de Ginebra y del Protocolo II⁸, el cual establece:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

- a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
- b) la toma de rehenes;
- c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
- d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

⁷ Los principios humanitarios señalados en este artículo, constituyen el fundamento del respeto de la persona dentro del conflicto armado no internacional.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. (Convenios de Ginebra, 1949).

2.1 Caso Las Palmeras v. Colombia

Este suceso tiene especial relevancia, debido a que fue el primer caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se pronunció sobre la necesidad de aplicar las normas del DIH al tratarse de hechos dentro del conflicto armado interno, haciendo especial énfasis en aplicar de manera directa las disposiciones del principio de distinción.

“Los hechos del presente ocurrieron el 23 de enero de 1991 en la localidad de Las Palmeras. El Comandante Departamental de la Policía de Putumayo ordenó a miembros de la Policía Nacional y del Ejército llevar a cabo una operación armada en dicho lugar. Los miembros de la Policía y el Ejército acudieron a una escuela rural donde detuvieron y asesinaron a Artemio Pantoja Ordóñez, Hernán Javier Cuarán, Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraiz Cerón Rojas, William Hamilton Cerón Rojas, Hernán Lizcano Jacanamejoy y Moisés Ojeda. Además, las fuerzas del Ejército abrieron fuego desde un helicóptero e hirieron al niño Enio Quinayas Molina, en ese entonces de seis años, quien se dirigía a la escuela”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2001, Caso Las Palmeras v. Colombia.)

Con el fin de encubrir su conducta, los miembros de la Policía Nacional y el Ejército vistieron con uniformes militares los cadáveres de las personas asesinadas y los presentaron como subversivos que pertenecían a un grupo armado al margen de la ley. Finalmente se logró determinar que las víctimas del operativo eran civiles mas no combatientes, vulnerándose así el principio de distinción, incumpliendo con la obligación de distinguir entre combatientes y población civil, lo cual llevó al Tribunal a determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal.

2.2 Masacre de Mapiripán vs Colombia

Entre el 15 y el 20 de julio de 1997 las Fuerzas militares en compañía de miembros de las Autodefensas unidas de Colombia, se desplazaron hacia el municipio de Mapiripán en donde privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles.

“Los miembros de esos grupos irregulares separaron a 27 personas relacionadas en una lista como presuntos auxiliadores, colaboradores o simpatizantes de las FARC y estas personas fueron torturadas y descuartizadas. Así mismo impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. Con posterioridad a la ocurrencia de esta cruel masacre, se verificó el desplazamiento forzado de más de quinientas familias de este municipio, hacia diferentes lugares del país”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia).

En este caso se vio particularmente afectado el principio de distinción, al no efectuarse una debida diligencia en la preparación de la operación, ya que no se desarrollaron las labores de inteligencia para establecer si efectivamente se presentó o no la participación de estas personas en actos de Las Farc, además frente al hecho de sí son o no simpatizantes de este grupo, el Derecho penal no tipifica esta acción en un marco delictual, por lo cual resulta irrelevante como justificación ante los actos de las Fuerzas militares y las autodefensas.

Por otro lado y sin ninguna justificación, se ejecutaron hostilidades de manera indiscriminada contra el resto de población civil, que se suponía era ajena a la participación de las 27 personas relacionadas con Las Farc. Adicionalmente, fue absolutamente desproporcional el sufrimiento al que fueron sometidas estas personas, infringiendo los límites inherentes tanto al principio de distinción, como a los de proporcionalidad, necesidad militar y humanidad.

Para la determinación de la responsabilidad internacional del Estado en el caso de esta masacre, la Corte IDH señaló que no se puede obviar el contenido de los deberes estatales de protección a la población civil derivados del Derecho Internacional Humanitario, en

particular del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y las normas del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional (Protocolo II). Esta protección abarca tanto las obligaciones pasivas que son las prohibiciones en su actuar, como las obligaciones positivas que incluyen impedir que se ejecuten violaciones contra las personas. Sin embargo, “la Corte Interamericana condena al estado colombiano sólo por el desconocimiento de obligaciones convencionales, a la ausencia de investigación de los hechos y a la falta de condena de los responsables.” (Mira & Arenas, 2018, p. 408), omitiendo entonces la condena por la vulneración del derecho internacional humanitario.

2.3 Masacre de Santo Domingo v. Colombia

“Este caso expone la responsabilidad internacional del Estado por el bombardeo del caserío de Santo Domingo, lo cual generó la muerte de numerosas personas civiles, así como lesiones y el desplazamiento forzado de otras.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012).

“El 12 de diciembre de 1998, se llevaba a cabo en la vereda de Santo Domingo un ‘bazar’ en el marco del cual se realizaron diversas actividades deportivas. Luego de que una avioneta Cessna aterrizara sobre la carretera que conduce de la vereda de Santo Domingo a Panamá de Arauca o Pueblo Nuevo con dinero o armas para actividades de narcotráfico, las Fuerzas Armadas de Colombia y la guerrilla protagonizaron enfrentamientos. En el marco de esos hechos, las Fuerzas Armadas realizaron una operación militar aerotransportada que se prolongó por varios días y en la cual también participaron la XVIII Brigada del Ejército Nacional y el Batallón Contraguerrilla No. 36. En ese contexto, el 13 de diciembre de 1998, varias aeronaves sobrevolaban los alrededores de Santo Domingo en horas de la mañana y, a las 10:02 am, la tripulación del helicóptero UH1H 4407 de la Fuerza Aérea Colombiana lanzó un dispositivo clúster de tipo AN-M1A2, compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación AN-M41A, sobre la calle principal de Santo Domingo, provocando la muerte de 17 personas, de las cuales seis eran niños y niñas, e hiriendo a otras

27 personas, entre ellas 10 niñas y niños. El Tribunal también constató que, como consecuencia de los hechos, ese mismo 13 de diciembre de 1998 la población de Santo Domingo tuvo que abandonar sus residencias y movilizarse al corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame, y a las ciudades de Tame y Saravena, situación que se intensificó a partir del bombardeo. La Corte también pudo constatar que, con posterioridad al lanzamiento del dispositivo clúster, la Fuerza Aérea Colombiana realizó ametrallamientos desde las aeronaves contra personas que se desplazaban en la carretera en dirección opuesta al caserío, ya fuera caminando o en un vehículo. El regreso de varios de los pobladores se efectuó a partir de enero de 1999”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 3).

Al igual que en el caso de Las Palmeras, se comprobó que los miembros de la Fuerza Aérea incumplieron con la obligación de verificar con la debida diligencia la naturaleza del objetivo y de medios a utilizar en su misión para garantizar que en su accionar distinguirían entre combatientes y población civil. En consecuencia, el Tribunal determinó la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. Teniendo en cuenta que:

“[...] No existe certeza de que el técnico encargado del lanzamiento del dispositivo tuviera contacto visual con el caserío antes de activar el dispositivo que liberó el clúster, e incluso, las evidencias permiten presumir lo contrario, teniendo en cuenta que quienes piloteaban desde el aire debían prever que en el momento de ejecutar la operación podía estar en riesgo la seguridad y presencia de la población civil.” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). Caso Masacre Santo Domingo v. Colombia)

La posición del Estado en este caso se fundamentó en que los pilotos de las aeronaves manifestaron dudas del carácter de civil o no de las personas que se desplazaban hacia el municipio de Tame al momento de los hechos. Sin embargo, frente a esta premisa es preciso aclarar que el combatiente debe adoptar las precauciones necesarias para determinar si una persona es civil, y de ser así, sí participa directamente de las hostilidades y cuando existan

dudas al respecto se considerará que es un ataque contra civiles. Precauciones que no se tuvieron en cuenta a la hora de ejecutar el ataque a la población de Santo Domingo, incumpliendo lo establecido por distintos reglamentos, que prohíben las ofensivas que vulneren este principio *intransgredible* de naturaleza consuetudinaria, del DIH. Andrés Augusto Harker Duran (2019), señala que el fundamento del actuar del Estado (...), “puede hacer referencia a la falta de exactitud y un preciso ejercicio al momento de realizar la operación, no obstante que, en este tipo de temas siempre se corre un riesgo, el cual únicamente debe asumir la Nación.” (p. 46).

Finalmente, la Corte dio por probado que durante los enfrentamientos con la guerrilla FARC, el Estado colombiano en calidad de sujeto responsable del DIH, infringió el principio de distinción al **conducir** el operativo aéreo en contra de la población civil, causando la muerte y lesiones de dichas personas que no hacían parte del conflicto y en consecuencia debe contraer obligaciones y responder internacionalmente.

Fabio Dussán (2016) señala que es imperativa la necesidad de llegar a la verdad sobre los hechos presentados por causa, ocasión y relación al conflicto armado interno, teniendo en cuenta que para el 2016 había 251 resultados cuestionados por su legalidad solo en el departamento del Caquetá, situación que se torna bastante relevante al tema materia de esta investigación.

4. Discusión: Análisis de las sentencias de la Corte IDH

En el análisis de fondo de los casos señalados previamente (...) “la Corte ha examinado violaciones de derechos humanos y el incumplimiento de obligaciones estatales reconocidos en la Convención Americana en relación a normas de DIH. Así, la Corte ha complementado el contenido y alcance del derecho a la vida, del derecho a la integridad de la persona, del derecho a la libertad de la persona, del principio de legalidad, de los derechos del niño, del derecho a la propiedad privada, y del derecho de circulación y de residencia.” (Ibáñez Rivas, 2016, p.197) La Corte utiliza las regulaciones del DIH con el único fin de facilitar la aplicación de la Convención, respecto a los alcances de las obligaciones del

Estado. Al respecto, conviene indicar que la competencia de la Corte Interamericana en los casos presentados previamente se deriva del hecho que Colombia hace parte del tratado internacional de la Convención Americana, acata la existencia de la Corte Interamericana y acepta la competencia de la misma atribuyéndole “la posibilidad de que ésta analice la conducta del Estado para determinar si la misma se ha ajustado o no a las disposiciones de aquella Convención aun cuando la cuestión haya sido definitivamente resuelta en el ordenamiento jurídico interno”⁹ (CIDH y CIRJ, 2018, p. 8).

Como lo señala Lorena Barrera Santana (2018),

“Al determinar que un Estado es responsable, la Corte IDH establece -en las consideraciones y en los resolutivos de la sentencia de fondo, reparaciones y costas- las medidas de reparación que deberá implementar el Estado responsable a efecto de subsanar la conducta ilícita cometida.” (p. 370)

Dichas medidas de reparación integral se pueden otorgar en distintas modalidades, las cuales pueden ser: de restablecimiento de derechos o la restitución de bienes, de rehabilitación de las diferentes afectaciones ocurridas a raíz de los hechos, de la obligación de investigar y sancionar a quienes ejecutaron la violación, de indemnización a modo de compensación y por su puesto la garantía de no repetición.

El contenido de las condenas proferidas por la Corte IDH en los casos revisados anteriormente, imponen al Estado colombiano obligaciones generales, instando al cumplimiento de compromisos como tomar “todas las medidas necesarias para adoptar y fortalecer con la respectiva disposición presupuestaria, un programa o curso obligatorio como parte de la formación general y continua, ...en todos los niveles jerárquicos, que contemple, entre otros, cursos o módulos sobre los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos y sobre los principios del Derecho Internacional Humanitario que guían el uso de

⁹ Ver también Sentencia C-225/95 de 18 de mayo de 1995, emitida por la Corte Constitucional “Las normas de derecho internacional han sido declaradas por la Corte Constitucional de Colombia como normas de *jus cogens*, que forman parte del “bloque de constitucionalidad” colombiano y que son obligatorias para los Estados y para todos los actores armados, estatales o no estatales, que participen en un conflicto armado”

la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.” (CIDH y CIRJ, 2018, p. 46). Lamentablemente, los elementos de reparación integral a las víctimas y sobrevivientes no suelen aparecer las obligaciones impuestas en las sentencias de la Corte IDH en casos de violaciones del IDH.

La supervisión de sentencias por parte de la Corte IDH (Artículo 63 de su reglamento) tiene especial relevancia, debido a que, a través de sus fallos, dicho tribunal busca contribuir a la erradicación de las violaciones a los derechos humanos, dictando las diversas reparaciones integrales, según sea el caso. De acuerdo al artículo 68 de la CADH, los Estados deben cumplir las sentencias dictadas en su contra, implementando la decisión de la Corte íntegramente, es decir sin modificar o incumplir las reparaciones establecidas. Dicha obligación es adquirida de buena fe por los Estados al momento de hacer parte de la Convención. Si bien, el cumplimiento de las sentencias está supeditado al sistema judicial de cada país, corresponde a la misma Corte IDH hacer un seguimiento “que se desarrolla principalmente mediante el sistema de informes de los Estados, observaciones de las víctimas y sus representantes, observaciones de la CIDH y audiencias, pero también, mediante cartas y solicitudes de información adicional” (Barrera Santana, 2018, p. 380).

Toda vez que el común denominador en estos casos radica en que existió una evidente desprotección de la población civil en el desarrollo de operaciones tácticas en el curso de hostilidades bélicas, además del incumplimiento de las obligaciones pasivas y positivas que determinaron la responsabilidad internacional del Estado colombiano, el análisis de cada caso en particular requiere identificar cuáles son los errores operacionales que permiten calificar como antijurídico el resultado de la operación realizada en combate teniendo en cuenta que (...) “la jurisprudencia de la Corte IDH representa una aportación importante en la tarea de definir la complementariedad entre el DIDH y el DIH”.(CIDH y CIRJ, 2018, p. 4)

Entre los elementos materiales de prueba para cuestionar la legalidad de las muertes generadas en combate como producto de una operación irregular se encuentran los informes de patrullaje que soportan lo realizado en una operación armada, y que en algunas oportunidades se utiliza para justificar el actuar inadecuado de los combatientes.

En la actualidad “muchas operaciones presentan un informe de patrullaje defectuoso e irregular, documental que consigna una serie de eventos fácticos que, al ser cotejados con otras documentales, como el acta de gasto de munición, tareas de policía judicial, declaraciones judiciales o disciplinarias que reposan en el proceso resultan abiertamente contradictorias, debilitado su presunción de legalidad”. (Dussan, 2016, p. 52).

Por su parte, José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto (2013), resumen los principales problemas para la aplicación y sanción del principio de distinción en situaciones de conflicto armado interno, destacando la disminución de las guerras internacionales y aumento de la frecuencia de los conflictos armados internos o no internacionales, que alcanzan más del 90 % de los actuales. Por sus características particulares, estos últimos se presentan para el desconocimiento o no aceptación del principio del monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, así como la confusión en la práctica entre combatientes y personas civiles.

Ahora bien, respecto al principio de distinción, hasta aquí se ha corroborado que existe una normatividad bastante extensa sobre la diferenciación entre combatientes y no combatientes en el transcurso de hostilidades bélicas. Este cuerpo normativo establece las ya mencionadas características que deben exhibir los combatientes para diferenciarse de una persona civil que no participa activamente del conflicto. Sin embargo, a la hora de aplicar este principio, evidenciamos que especialmente en conflictos armados internos como el colombiano se suelen presentar conductas que hacen imposible esta “distinción”, entre ellas:

1. En la actualidad, se sabe que un gran número de civiles simpatizan con las ideas ya sea del Ejército, de paramilitares o guerrillas, y la prolongación del conflicto armado interno en Colombia se debe precisamente a que los diferentes actores armados involucran cada vez a más civiles en sus operaciones. Esta situación dificulta la distinción entre quienes actúan en calidad de combatiente y quiénes no, “Las distinciones entre la barbarie externa y el civismo interno, entre el combatiente como legítimo portador de armas y el no combatiente, entre soldado o policía y el criminal, son distinciones que están desvaneciéndose”. (Valencia Villa, 2007, p. 139).

2. Las personas civiles que no participan del conflicto, son atacadas directamente por los combatientes, omitiendo la protección que el DIH establece. Por consiguiente, “...son muchos los procesos judiciales que se caracterizan por la ausencia de evidencia documental o testimonial que acredite la calidad de combatiente de quien ha sido neutralizado”. (Dussan, 2016, p. 32). Dada las dificultades para verificar la identidad de las personas en situación de combate en guerra irregular, esta situación se hace aún más compleja cuando, ante la ausencia de informes de inteligencia, de fuentes verídicas, antecedentes o pruebas testimoniales, se intenta acreditar la identidad de un occiso con base en supuestos. Circunstancia, que, a su vez, genera la responsabilidad internacional del Estado.

3. También ocurre que las personas civiles combaten activamente, pero ocultando su condición de combatientes, aprovechando la protección de la cual gozan, y de la falta de accesorios que los puedan identificar plenamente como combatientes. Así,

“la pérdida de exclusividad en el ejercicio de la guerra por parte del Estado, y su imposibilidad de mantener el estado de paz interno; la irrupción de nuevos actores en la guerra y la construcción de un tipo de enemistad absoluta han contribuido a la progresiva eliminación de las distinciones clásicas de la guerra”. (Peña Aragón, 2014, p. 45).

4. Adicionalmente, en este contexto encontramos las dificultades para determinar las actividades que son calificadas como “participación directa”, puesto que como se señaló previamente, no existe una definición explícita ni exacta de lo que debe entenderse como *participación directa en combate*, situación que se presta para múltiples interpretaciones por parte de cada sujeto de acuerdo con su conveniencia jurídica.

A continuación, se presentan una serie de conclusiones que derivan de lo establecido en el DIH respecto al principio de distinción y la realidad del conflicto armado interno en Colombia, además de posibles soluciones para que se cumpla con lo establecido en las condenas por responsabilidad estatal a causa de quebrantar lo establecido en las convenciones de derechos humanos a las cuales se encuentra suscrita la nación.

Conclusiones

1. Como se ha señalado en Colombia, un país en el cual el conflicto armado interno se da entre fuerzas militares estatales y grupos armados organizados no estatales, hay problemas prácticos que impiden aplicar el principio de distinción. Entre ellos, la natural resistencia de los actores del conflicto a respetar el principio de distinción en el calor de las hostilidades; el hecho de que en las zonas donde transcurren las hostilidades bélicas la mayor parte de la población asentada allí es obligada por los propios actores armados a participar ya sea directa o indirectamente de las hostilidades, so pena de repercusiones contra su vida y estabilidad socio-económica; además el carácter irregular de la guerra de guerrillas propicia que “el principio de distinción de manera particular, ha permanecido invariable en casi 200 años, declarando la necesidad de diferenciarse de la población civil a través del porte de armas a la vista y el uso de uniforme e insignias, situación que desconoce claramente los cambios introducidos en la guerra irregular” (Peña Aragón, 2014, p. 2).

2. La aplicación del principio de distinción en Colombia es aún muy endeble debido a que con el transcurrir del tiempo fuerzas armadas activas en el conflicto armado han modificado las tácticas de combate, cada vez con mayor frecuencia involucrando forzosamente la participación directa e indirectamente de civiles en las hostilidades bélicas mediante prácticas como el reclutamiento forzado de menores, el asesinato selectivo o indiscriminado de civiles ajenos a las hostilidades para aterrorizar a la población, y la escenificación engañosa de combates para justificar falsos positivos en los que las fuerzas armadas estatales se ejecutan a civiles presentados de manera falaz como supuestos guerrilleros en abierto la normatividad del DIH. De allí la notable distancia que separa la formalidad de la materialización de las normas del DIH. De otra parte, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena las omisiones de los Estados en su obligación internacional de evitar la vulneración de principios y garantías fundamentales del DIH, es evidente la precariedad de la institucionalidad prevista en el ordenamiento jurídico colombiano para cumplir efectivamente estas obligaciones.

“Se evidencia que se hace necesario crear una autoridad que verifique y controle el cumplimiento de los Convenios de Ginebra y de los adicionales, debido a que en la práctica no existe mayor eficacia sobre las normas del Derecho Internacional Humanitario, prevaleciendo en nuestro ordenamiento interno.” (Bobadilla Vargas, 2019, p.1)

3. De acuerdo a Silva (2017), es claro que las muertes ejecutadas por los terroristas en general no respetan las leyes del Derecho Internacional Humanitario. En el marco del conflicto armado colombiano, cuando un miembro de un grupo armado irregular coloca una bomba explosiva en un municipio, está cometiendo homicidios y lesiones que sin lugar a dudas se producen con dolo directo en primer grado sobre la población civil, por lo cual debería calificarse como crimen de guerra.

4. Como respuesta a la pregunta de investigación, se determina que factores como el involucramiento forzado de civiles a participar de manera directa e indirecta en el conflicto armado por las fuerzas armadas activas en el mismo, el protagonismo de grupos de combatientes no estatales que desconocen la regulación existente o simplemente la evaden a modo de estrategia, al igual que la utilización deliberada de tácticas de encubrimiento por las distintas fuerzas armadas para crear confusión sobre la diferenciación entre combatiente y no combatiente, dificultan la sanción de infracciones contra el principio de distinción en el contexto del conflicto armado colombiano.

5. A la luz del ordenamiento jurídico, el principio de distinción es claramente vinculante para combatientes, pero su aplicación y sanción es compleja en la práctica. Se evidencia la imposibilidad de identificar a las personas no uniformadas que participan ocasionalmente en actividades propias del combate, como el sabotaje o la colaboración activa con los servicios de inteligencia del adversario. En estas condiciones, en el terreno resulta difícil establecer la naturaleza de su participación en las hostilidades, o si el umbral de daño ocasionado, causalidad directa y nexo de beligerancia contribuyen en grado mayor en operaciones bélicas llevan a la desnaturalización de persona protegida y pérdida de la inmunidad de la que gozan.

“Se trata de una cuestión cuya importancia se deriva de que las personas civiles pierden su inmunidad frente a los ataques directos únicamente durante el tiempo en que participan directamente en las hostilidades. Es decir, el principio y el fin del acto específico de hostilidad deben ser regulados con precisión” (Rodríguez-Villasante y Prieto, 2013, p.193)

Por consiguiente, en tales circunstancias se dificulta determinar o intuir al momento de los hechos si un civil participa o no directamente en las hostilidades. Además, aún está pendiente implementar una definición unívoca de “participación directa”, que permita la plena identificación de los actos que gozan de esta calidad dentro las acciones bélicas para facilitar la distinción entre las personas. Por otro lado, varios magistrados, plantean la necesidad de que las normas de derecho humanitario sean consideradas *Ius cogens*, para hacer más exigibles los principios y reglas que consagran. (Díaz, 2012).

6. Es necesaria la regulación del actuar de los combatientes, puesto que no basta con posturas argumentativas sin acreditación probatoria para justificar su actuar en el desarrollo de hostilidades bélicas. Así mismo, es importante la supervisión de cumplimiento total de las sentencias que condenan a los Estados por sus responsabilidades internacionales, para que la reparación integral de las víctimas sea completa y para que se sancionen a los infractores, ya sean estatales o no estatales que hayan causado y/o causen la vulneración de derechos humanos.

Referencias

Bibliografía doctrinal

- Agudelo-Giraldo, O.A. (Ed.). (2018). *La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación*. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia
- Angarita Piña, R. (1999). El derecho internacional humanitario, sus reglas, su interpretación y la corte penal internacional. *Revista Reflexión Política* 1 (2), Universidad

Autónoma de Bucaramanga. Recuperado a partir de <https://revistas.unab.edu.co/index.php/reflexion/article/view/884>

Barrera Santana, L. (2018). Supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, Año 24, pp. 363-387

Bernal Castro, C. A., Moya Vargas, M. F., Carvajal Martínez, J., Tirado Acero, M. (2018). *Derecho internacional humanitario en el conflicto armado colombiano*. Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.

Bobadilla Vargas, K. (2019). *La teoría de la puerta giratoria inmersa en el principio de distinción en la aplicación del derecho internacional humanitario en Colombia*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Cardona, V., González, G., González, M. A., Lozano, A., Manotas, L., Marriaga, S., Monroy, J., Nader, D., Ospino, M., Pineda, R., Valiente, A. (2008). *Derecho Internacional Humanitario: Verdades y contradicciones*. Barranquilla: Universidad de Norte.

Castillo, S., Lozano, F., Mateus, L., Molano, A. (2007). LA PERDIDA DE LA CONDICION DE PERSONA PROTEGIDA DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS. Clínica Jurídica de Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Universidad del Rosario.

Cepeda Caballero, A. (2016). De la responsabilidad extracontractual del estado colombiano por el delito de la desaparición forzada: un estudio de línea jurisprudencial de las sentencias emitidas por el Consejo de Estado, en procesos de reparación directa, durante el período 2011 - 2016. Trabajo de Grado. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (1997). La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la licitud del empleo de armas nucleares. *Revista Internacional de la Cruz Roja*, Vol. 22, No.139 (Número Especial), pp. 22-36.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2005). Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario: una contribución a la comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados. *Revista Internacional de la Cruz Roja*, Vol. 87, No. 857, (Separata), pp. 3-47.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2010). *Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario*. Disponible en: <https://www.icrc.org/es/publication/guia-participacion-directa-hostilidades-derecho-internacional-humanitario-dih>

Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité Internacional de la Cruz Roja. (CIDH y CICR). (2018). Interacción entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. *Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, no. 17, San José, C.R.: Corte IDH.

Díaz Tolosa, R. I. (2012). Aplicabilidad en el ámbito interno y en tiempos de paz de las normas ius cogens del Derecho Internacional Humanitario. Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca. Año 10, N.º 2, pp. 281 - 322.

Dussán Alarcón, F. A. (2016). Muertes cuestionadas en combate producto de errores administrativos en operaciones militares. La guerra judicial en el departamento de Caquetá, 2002-2010. Trabajo de Grado. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Harker Durán, A. A. (2019). Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicación de principios internacionales en el caso: Santo Domingo vs Colombia. Trabajo de Grado. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bogotá, Colombia.

Ibáñez Rivas, J. M. (2016). El derecho internacional humanitario en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista Derecho del Estado* n.º 36, Universidad Externado de Colombia.

- Pacheco Sánchez, R. (sin fecha). Derecho internacional humanitario. Disponible en: <http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/pdhulbq/publicaciones/DIH%20%20060903.pdf>
- López Díaz, P. (2009). Principios fundamentales del derecho internacional humanitario. *Revista Marina*. 2009. Vol. 3, p.p. 230-238.
- Mira, C., Arenas, J. (2018). El Derecho Internacional Humanitario en las sentencias de la Corte Interamericana: un análisis de los casos colombianos. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, Vol. 48, N° 129, págs. 401-415
- Organización de Naciones Unidas. (2019). *La mayor parte de las víctimas de los conflictos armados siguen siendo civiles*. Noticias ONU.
- Peña Aragón, C. (2014). *El principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario: Fundamentación, alcances, limitaciones y retos*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Rodríguez-Villasante y Prieto, J. L. (2013). La pérdida de la inmunidad de las personas civiles por su participación directa en las hostilidades. *Cuadernos de estrategia*, N°. 160, págs. 165-208.
- Silva Sánchez J. (2017). Asesinatos selectivos en la “guerra punitiva” contra el terrorismo. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra.
- Valencia Villa, A. (2007). *Derecho internacional humanitario: Conceptos básicos: infracciones en el conflicto armado colombiano*. Bogotá: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Referencias legal y jurisprudencial

Constitución Política de Colombia. (1991).

Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, Tratado Internacional (Comité Internacional de la Cruz Roja 12 de agosto de 1949).

Corte Constitucional de Colombia. (1995). *C-225/95*. Bogotá, Colombia.

Corte Constitucional de Colombia. (2007). *C-291/07*. Bogotá, Colombia.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2001). *Caso Las Palmeras Vs Colombia*. San José de Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005). *Caso de la “Masacre de Mapiripán v. Colombia*. San José de Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). *Caso Masacre de Santo Domingo v. Colombia*. San José de Costa Rica: Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ley 599 de 2000. *Código Penal Colombiano*.

Protocolos Adicionales a los convenios de Ginebra. (30 de noviembre de 1993). Protocolo I de 1977. Numeral 1. Ginebra, Suiza: Comité Internacional de la Cruz Roja.